

El Senador y Cámara de Diputados
de la Provincia de Buenos Aires
sancionan con fuerza de

Ley 10869
CAPITULO I

DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Art. 1º - El Tribunal de Cuentas es un órgano de control administrativo con funciones jurisdiccionales y posee las atribuciones que le confiere la Constitución de la Provincia y las que le otorga esta ley. Su sede central será la Capital de la Provincia.

Art. 2º.- Para ocupar el Cargo de Presidente de Tribunal se requiere tener treinta (30) años de edad, - ciudadanía en ejercicio y título de Abogado con seis (6) años de ejercicio profesional en la Provincia o el mismo tiempo de magistrado en ella, como mínimo. Para ocupar el cargo de Vocal, se requiere, ser ciudadano argentino, tener treinta (30) años de edad, título de Contador Público con seis (6) años de ejercicio profesional en la Provincia como mínimo.

El Presidente y los Vocales del Tribunal deberán tener domicilio real inmediato anterior no menor de un (1) año, en la Provincia.

Es incompatible para los miembros del Tribunal, - ejercer la profesión en cualquier jurisdicción, desempeñar otra función pública, excepto la docencia y realizar actividades comerciales incompatibles con el ejercicio de sus funciones.

Art. 3º.- No podrán ser miembros del Tribunal de Cuentas - los concursados civilmente y/o comerciantes que

//2

se encuentren en estado de quiebra o los que estén inhabilitados por deuda judicialmente exigible, o aquellos que hubiesen sido condenados por sentencia firme por la comisión de delitos dolosos contra la propiedad, la administración o la fée pública nacional, provincial y municipal.

Tampoco podrán ser miembros los inhabilitados para ejercer la función pública por el propio Tribunal.

Art. 4°.- Los miembros del Tribunal deberán prestar juramento, ante el mismo, de desempeñar fielmente sus funciones de acuerdo a la Constitución, y a esta ley.

Si el Tribunal no tuviere "quórum", se prestará juramento ante los miembros que existieren en el ejercicio del cargo y si la vacancia fuera absoluta, jurarán los Vocales ante el Presidente y éste ante los Vocales, labrándose acta.

Art. 5°.- El Tribunal determinará su organización interna a efectos de la realización del estudio de rendiciones de cuenta correspondientes de la Administración Central, Poder Legislativo, Poder Judicial, Reparticiones Autónomas o Autárquicas, Municipalidades y Entes que reciban, posean o administren fondos o bienes fiscales, conforme a sus facultades.

Art. 6°.- El Presidente y los Vocales del Tribunal gozan de las mismas prerrogativas que los miembros de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial y son enjuiciables por la Ley del Jury de Enjuiciamiento. No podrán aceptar ni desempeñar comisiones o funciones públicas encomendadas interinamente por el Poder Ejecutivo u otro Poder del Estado.

CAPITULO II

FACULTADES DEL PRESIDENTE

Art. 7°.- El Presidente del Tribunal lo representa en sus

//..

relaciones con terceros, con las autoridades administrativas, judiciales, comunales y particulares con las siguientes atribuciones:

1. Presidir los acuerdos del Tribunal y firmar toda resolución o sentencia que éste dicte, así como toda comunicación dirigida a otras autoridades o particulares. Con las autoridades judiciales se comunicará por exhorto u oficio y éstas observarán el mismo procedimiento para dirigirse al Presidente del Tribunal de Cuentas.
2. Es el Jefe del Personal que se asigne al Tribunal, teniendo las atribuciones que le confiere el régimen para el personal de la Administración Pública de la Provincia.
3. Proyectar con intervención del Cuerpo el Presupuesto del Organismo, para ser elevado al Poder Ejecutivo.
4. Autorizar y disponer de los fondos que sean concedidos al Tribunal por la ley y determinar su aplicación en todos los casos.
5. Despachar los asuntos de trámite, requerir la remisión de antecedentes, informes o pericias a organismos públicos o privados y toda otra información necesaria para resolver las actuaciones.
6. Proponer al Poder Ejecutivo la designación de los empleados del Tribunal, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 40° de la Constitución.
7. Convocar al Cuerpo a los acuerdos extraordinarios cuando razones de urgencia o de interés público, lo hagan necesario.



Art. 8°.- Si el Presidente fuera inhabilitado o tuviera que ausentarse o no pudiera concurrir al Tribunal por un término mayor de ocho (8) días, lo hará saber estableciendo la causa y el término de su ausencia y solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación de un Camarista, que lo reemplazará en

//4

el ejercicio de sus funciones. La designación deberá recaer en alguno de los miembros de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, con sede en la Capital de la Provincia.

CAPITULO III

FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL

Art. 9°.- El Tribunal realizará por lo menos un acuerdo por semana, a cuyo efecto determinará los días que debe reunirse, haciéndolo el siguiente si fuera feriado. La inasistencia del Presidente y los Vocales deberá justificarse en cada caso y sus faltas reiteradas sin causa a las sesiones se considerará falta grave.

En tal caso o en el de notoria desatención de sus funciones, podrá el Tribunal dirigirse al señor Presidente de la Suprema Corte de Justicia, solicitando la constitución del Jury de Enjuiciamiento de Magistrados, para juzgar al miembro imputado.

Art. 10°.- Los miembros del Tribunal pueden excusarse y son recusables por los funcionarios o ex-funcionarios cuyas cuentas se juzguen, por las causales que la Ley de Procedimiento establezca para los Jueces de las Cámaras de Apelación en materia civil. La excusación deberá formularse al avocarse el Tribunal al conocimiento de la rendición de cuentas y la recusación podrá deducirse hasta tres (3) días después de la fecha de llamamiento de autos para resolución o al contestar el traslado que se corra de los cargos formulados. Pasadas tales oportunidades no podrá cuestionarse la constitución del Tribunal.

La decisión del Tribunal con respecto a la excusación o recusación de sus miembros será definitiva, no admitiéndose contra ella ningún recurso.

El Presidente del Tribunal deberá excusarse cuando se juzgue la rendición de cuentas de su gestión administrativa.

Art. 11°.- Cuando por cualquier causa fuere necesario integrar -

//..

//5

5937

el Tribunal por carecer de "Quórum" propio, el Presidente deberá comunicarlo al Poder Ejecutivo a efectos de proponer al Senado, un Vocal suplente, el que será designado por el término que dure la ausencia del Vocal titular.

La retribución del Suplente será atendida por el Tribunal de Cuentas, con cargo a su Presupuesto. El Vocal suplente recibirá la misma remuneración que le corresponde al cargo del Titular.

Art. 12°.- Todos los magistrados y funcionarios de la Provincia, están obligados a suministrar al Tribunal, dentro del término que él señalare, los informes, antecedentes, documentos originales o copias autenticadas y comprobantes que solicitare. Si no fueren facilitados, el Tribunal podrá obtenerlos encomendando a un empleado la tarea que en cada caso corresponda, sin perjuicio de corregir disciplinariamente la desobediencia en que pudiera haberse incurrido por determinado funcionario.

Art. 13°.- El "quórum" para sesionar no podrá ser inferior al de dos (2) Vocales y el Presidente y las decisiones del Tribunal se tomarán por mayoría de votos, teniendo el Presidente doble voto, en caso de empate.

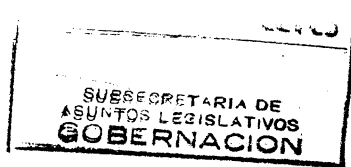
Se labrará acta consignando lo resuelto en el acuerdo, que será firmada por el Presidente y Secretario o empleado a quien el Presidente designe.

Unicamente en el caso de disidencia, se plantearán cuestiones con respecto a las cuales se pronunciará cada Vocal en el orden que establezca el sorteo, que deberá efectuar el Presidente.

Art. 14°.- Es facultad del Tribunal:

1. Examinar los Libros de Contabilidad y la documentación existente en las dependencias públicas provinciales o comunales o en aquellos entes que de cualquier forma perciban, posean o administren fondos o bienes fiscales.

//..



10869

5937

2. Inspeccionar las mismas.
3. Realizar arquezos de Caja.
4. Efectuar la comprobación sumaria de los hechos delictuosos cometidos en la inversión de los fondos públicos.
5. Celebrar convenios con Organismos similares de otras jurisdicciones para la fiscalización conjunta de Entes Interestaduais, sujetos a su competencia.
6. Toda otra actividad que coadyuve al cumplimiento de las funciones previstas en la presente ley.

Art. 15°.- El Tribunal es la única autoridad que puede aprobar o desaprobar definitivamente las cuentas rendidas por los obligados previstos en el artículo 5° de la presente ley. Declarará su competencia para intervenir en una rendición de cuentas sin recurso alguno.

Art. 16°.- En el ejercicio de sus atribuciones sobre el control de la hacienda pública o cuando se obstruyan sus actos o frente a la desobediencia a sus resoluciones, el Tribunal de Cuentas podrá aplicar las siguientes sanciones:

1. Llamado de atención.
2. Amonestaciones.
3. Cargos pecuniarios hasta un importe igual a los valores sometidos a juicio.
4. Multas, cuyos montos se graduarán entre dos (2) y veinte (20) sueldos mínimos de la Administración Pública Provincial, vigente al momento de la aplicación.
5. Inhabilitación hasta cinco (5) años para el desempeño de funciones provinciales o municipales.

Para el cumplimiento de sus resoluciones el Tribunal podrá hacer uso de la fuerza pública. El procedimiento será establecido en la respectiva reglamentación.

CAPITULO IV
CUENTAS PROVINCIALES

Art. 17°.- La Contaduría General, antes del 15 de Abril de cada año, formulará la Cuenta General del Ejercicio vencido y la remitirá al Tribunal de Cuentas, pero si no lo hiciere, éste deberá fijarle un plazo perentorio para el envío de toda la documentación. Si el requerimiento no diera resultado, se pondrá el hecho en conocimiento de la Honorable Legislatura.

La falta de envío de la cuenta, dentro de los términos que señala la ley, será considerada falta grave.

El Tribunal de Cuentas, deberá dictar sentencia dentro de los doce (12) meses siguientes, contados a partir de la fecha indicada en el presente artículo. Caso contrario, la cuenta se considerará aprobada.

Art. 18°.- Los Directorès de Administración o funcionarios que hagan sus veces de las distintas dependencias provinciales previstas en el artículo 5° de la presente ley, presentarán mensualmente rendición de cuentas ante la Contaduría General. El Tribunal determinará en su reglamento las formas en que esas cuentas deberán ser presentadas.

La Contaduría General, intervendrá conforme a lo establecido en su Ley Orgánica y en la Ley de Contabilidad y elevará al Tribunal de Cuentas las rendiciones mensualmente, no pudiendo exceder la última elevación del 31 de mayo de cada año.

El Tribunal podrá aplicar las sanciones establecidas en el artículo 16°, contra los funcionarios que administren esos fondos.

DEPARTAMENTO LEYES
SUBSECRETARIA DE ASUNTOS LEGISLATIVOS
GOBERNACION
CAPITULO V

10869

5937

CUENTAS MUNICIPALES

Art. 19°.- A efectos de atender la administración del control de los Municipios, el Tribunal de Cuentas tendrá diecisiete Delegaciones, integradas por los Partidos y con asiento en las sedes que se indican a continuación:

ZONA I:

Partidos de La Plata, Berisso, Ensenada, Magdalena, Brandsen y San Vicente, con sede en la ciudad de La Plata.

ZONA II:

Partidos de Quilmes, Berazategui y Florencio Varela, con sede en la ciudad de Quilmes.

ZONA III:

Partidos de Avellaneda y Lanús, con sede en la ciudad de Avellaneda.

ZONA IV:

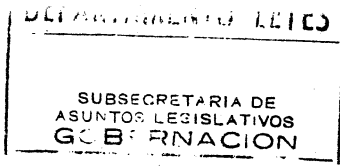
Partidos de Lomas de Zamora, Almirante Brown, Esteban Echeverría y Cañuelas, con sede en la ciudad de Lomas de Zamora.

ZONA V:

Partidos de La Matanza y Merlo, con sede en la ciudad San Justo.

ZONA VI:

Partidos de Morón, Moreno y General Sarmiento, con sede en la ciudad de Morón.



10869

//9

5937

ZONA VII:

Partidos de Tres de Febrero, General San Martín y Vicente López, con sede en la ciudad de Vicente López.

ZONA VIII:

Partidos de San Isidro, San Fernando, Tigre y Escobar, con sede en la ciudad de San Isidro.

ZONA IX:

Partidos de Bahía Blanca, Villarino, Patagones, General Rosales, Municipio Urbano de Monte Hermoso, Coronel Dorrego y Tres Arroyos, con sede en la ciudad de Bahía Blanca.

ZONA X:

Partidos de General Pueyrredón, General Alvarado, Bañcarce, Mar Chiquita, San Cayetano, Necochea, Lobería, Villa Gesell y Pinamar, con sede en la ciudad de Mar del Plata.

ZONA XI:

Partidos de San Andrés de Giles, Luján, Pilar, Exaltación de la Cruz, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Navarro, Lobos, General Las Heras, Marcos Paz, General Rodríguez, con sede en la ciudad de Mercedes.

ZONA XII:

Partidos de Pellegrini, Tres Lomas, Salliqueló, Guaminí, Daireaux, General Lamadrid, Coronel Suárez, Saavedra, Tornquist, Puán, Adolfo Alsina, con sede en la ciudad de Pigué.

//..

ZONA XIII:

Partido de Benito Juárez; Gonzáles Cháves, Olavarría, Azul, Tandil, Rauch, Las Flores, Tapalqué, General Alvear, Saladillo, Roque Pérez, con sede en la ciudad de Azul.

ZONA XIV:

Partidos de Ayacucho, General Madariaga, Maipú, General Guido, De la Costa, General Lavalle, Tordillo, Dolores, Pila, Castelli, General Belgrano, Chascomús, - General Paz y Monte, con sede en la ciudad de Dolores.

ZONA XV:

Partidos de Hipólito Yrigoyen, Trenque Lauquen, Pehuajó, Rivadavia, Carlos Tejedor, Carlos Casares, Nueve de Julio, Coronel Pringles, Laprida, Bolívar, con sede en la ciudad de Pehuajó.

ZONA XVI:

Partidos de General Viamonte, Lincoln, General Villegas, General Pinto, Leandro N. Alem, Rojas, Salto, General Arenales, Junín, Chacabuco, Alberti, Bragado, y 25 de Mayo, con sede en la ciudad de Junín.

ZONA XVII:

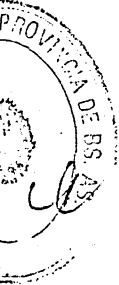
Partidos de Pergamino, Colón, San Nicolás, Ramallo, San Pedro, Baradero, Bartolomé Mitre, Capitán Sarmiento, Carmen de Areco, Zárate, Campana, y San Antonio de Areco, con sede en la ciudad de Zárate.

Art. 20°.- Las Delegaciones estarán integradas, por un Delegado, tres (3) Relatores y cuatro (4) Agentes Técnicos o Administrativos. El Delegado y los Relatores deberán poseer título de Contador Público y accederían al cargo por concurso.

Al Presupuesto Anual del Tribunal deberá proveer los créditos necesarios para el funcionamiento de las Delegaciones.

Art. 21°.- Serán funciones de la Delegación:

1. Realizar el estudio integral de las cuentas de los organismos bajo su jurisdicción. A tal efecto deberá:
 - a) Estudiar y dictaminar sobre los estados de ejecución de Planta de Personal, de Ejecución del Presupuesto de Gastos, de Ejecución del Cálculo de Recursos, de Ejecución de Cuentas Especiales, de Ejecución de Terceros, de Movimiento de Fondos y Valores, de patrimonio, de Resultado Económico Financiero y todo otro que establezca reglamentariamente el Tribunal de Cuentas.
 - b) Realizar arquezos, relevamiento de Inventario de Bienes y Valores, así como toda otra gestión de control que haga al cometido de su competencia.
 - c) Realizar las inspecciones y auditorías en las oficinas y demás dependencias de la administración municipal y elevar sus resultados al Tribunal de Cuentas, quien a su vez notificará al responsable del órgano municipal que correspondiere.
2. Evacuar por escrito las consultas que le formulen las autoridades municipales; y



3. Informar mensualmente al Tribunal respecto de sus acciones y requerir la intervención de éste cuando lo estime necesario.

Art. 22°.- Serán funciones y obligaciones del Delegado:

1. Ejercer la jefatura del personal a su cargo.
2. Administrar los fondos que le asigne el Tribunal para el ejercicio de sus funciones.
3. Resolver las contrataciones de servicios o adquisición de bienes de la Delegación, conforme lo determine el Tribunal.
4. Firmar toda información, documentación o notificación que expida la Delegación.
5. Programar y ejecutar el estudio de las cuentas de los Municipios de su Delegación.

Art. 23°.- Cada Intendente Municipal presentará al Concejo Deliberante antes del 15 de Abril de cada año, la Rendición de Cuentas de la percepción e inversión de los fondos comunales, que estará compuesta como mínimo por los siguientes Estados Demostrativos:

1. De ejecución del Presupuesto de Gastos con relación a los créditos, indicando por cada uno:
 - a) Monto original.
 - b) Modificaciones introducidas en el Ejercicio.
 - c) Monto definitivo al cierre del Ejercicio.
 - d) Compromisos contraídos.
 - e) Pagos efectuados.
 - f) La deuda.

- g) La economía o exceso.
2. De ejecución del Presupuesto con relación al Cálculo de Recursos, indicando por cada rubro:
 - a) Monto calculado originalmente.
 - b) Monto calculado definitivamente al cierre del Ejercicio.
 - c) Monto efectivamente recaudado.
 - d) Diferencia entre lo calculado en forma definitiva y lo recaudado.
 3. De la ejecución de la Planta de Personal aprobada y ocupada.
 4. De las modificaciones del Presupuesto de Gastos, con indicación de norma legal y Partidas.
 5. De ejecución de los recursos afectados, con indicación de los rubros por los cuales se ingresó y las Partidas del Presupuesto de Gastos por las cuales se gastó.
 6. Del movimiento de cuentas de terceros.
 7. Del movimiento de cuentas especiales.
 8. Del movimiento de Fondos y Valores operados en el Ejercicio.
 9. De la evolución del Pasivo, consolidado y flotante y discriminado por Partidas.
 10. De la evolución del Activo.
 11. De la situación económico-financiera.

Además, se acompañará un informe de los titulares de los Departamentos Ejecutivo y Deliberativo, respecto al cumplimiento de los programas y planes de Gobierno de sus respectivos Presupuestos.

//14

Los Libros y la documentación probatoria, quedarán en custodia en el Departamento Ejecutivo y a disposición del Concejo Deliberante.

El Concejo Deliberante analizará los estados y se pronunciará sobre las cuentas antes del 15 de Junio de ese año. Si vencido ese plazo no se expidiere, las mismas quedarán aprobadas, incluyéndose en tal aprobación la compensación de los excesos que surgieren. Su pronunciamiento será remitido a la Delegación del Tribunal, antes del 30 de Junio de ese año.

Si el Intendente o el Concejo Deliberante no cumplieran con las obligaciones y plazos establecidos anteriormente, el Tribunal de Cuentas resolverá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16° de la presente ley.

Art. 24°.- Para el estudio de las cuentas municipales de cada Ejercicio, se observarán los procedimientos y plazos que se indican a continuación:

1. Antes del 15 de Abril de cada año, el Departamento Ejecutivo remitirá a la Delegación, la rendición de cuentas del Ejercicio Anual anterior en la forma establecida en el artículo precedente.
2. Antes del 30 de Junio, la Delegación complementará el estudio de la cuenta y confeccionará el dictamen final, debidamente fundado, del Ejercicio anterior y lo elevará al Tribunal de Cuentas.
3. El Tribunal de Cuentas antes del 31 de Agosto solicitará al Municipio la totalidad de los elementos que necesite para resolver el juicio de cuenta.
4. El Municipio, antes del 31 de Octubre deberá completar los elementos requeridos y remitirlos al Tribunal de Cuentas.
5. El Tribunal de Cuentas deberá dictar sentencia dentro de los seis (6) meses siguientes, conta-



//15

dos a partir de la fecha establecida en el inciso anterior. Caso contrario, las cuentas se considerarán aprobadas.

El Tribunal podrá hacer comparecer a los funcionarios municipales para que suministren los informes y explicaciones que le fueren requeridas con motivo del estudio de las cuentas que hubieren presentado.

Si el Municipio no cumpliera con los plazos establecidos en los incisos 1) y 4), el Tribunal dictará sentencia en base a los antecedentes obtenidos, sin perjuicio de las medidas establecidas en el artículo 16° de la presente ley.

Art. 25°.- Cada Municipio deberá llevar los Libros que el Tribunal determine. La rúbrica de los mismos será realizada en el tiempo y forma que el Tribunal establezca.

CAPITULO VI

PROCEDIMIENTO

Art. 26°.- El Tribunal reglamentará el procedimiento para el estudio de la cuenta. El mismo será realizado por Relatores que deberán poseer título de Contador Público.

El Relator al realizar el estudio se pronunciará sobre la documentación y estados, si ellos son completos y requerirá la presentación de los que faltaren si correspondiere.

Art. 27°.- Si se tratare de las cuentas generales de la Administración provincial, se correrá traslado al Contador General de la Provincia y funcionarios responsables, de los requerimientos u observaciones formulados por el Relator por un término que no excederá de treinta (30) días.

Si se tratare de cuentas municipales se correrá traslado por igual término a los titulares de los Departamentos Ejecutivo, Deliberativo u Organismos Descentralizados y funciona-

//..

rios responsables de los requerimientos u observaciones formuladas por el Relator.

Si se tratare de Organismos interjurisdiccionales, se correrá traslado al titular del mismo, al responsable de la Administración Provincial, el Contador General de la Provincia si se correspondiere y a los funcionarios responsables de los requerimientos u observaciones formulados por el Relator.

Las notificaciones se realizarán mediante carta documento, telegrama colacionado, telex u otros medios fehacientes o por los Delegados si correspondiere.

Si el responsable no viviera en el domicilio declarado, será citado por edictos que se publicarán por cinco (5) días en el Boletín Oficial.

Art. 28°.- Si vencido el término acordado, no compareciere el funcionario a levantar los cargos hechos, el Presidente dictará providencias de autos para resolver y se pasará el expediente al Vocal que corresponda, para que se proyecte el fallo.

Art. 29°.- Si compareciere el funcionario a quien se ha formulado cargo, efectuará en un mismo escrito su defensa y ofrecimiento de prueba que hace a su derecho. El Presidente ordenará las diligencias probatorias solicitadas, fijando el término para su producción. Si el plazo excediera de treinta días, deberá ser aprobado por el Tribunal. Si la prueba no se produjera por omisión de las autoridades requeridas para ello, el Tribunal adoptará las medidas que se consideren necesarias a efectos de cumplir sus resoluciones, bajo apercibimiento de aplicar las sanciones previstas en el artículo 16°.-

Art. 30°.- Agregada la prueba o vencido el término fijado para su producción, sin que los interesados la hayan urgido, se pasarán las actuaciones al Relator para que se pronuncie concretamente sobre el valor de dicha prueba y con su informe quedará el expediente para sentencia.

//17

El Presidente dictará la providencia de autos para resolver y pasará el expediente al Vocal que tuviera a su cargo la división en la cual se efectuó el estudio, para que proyecte el fallo dentro de un término que no excederá de veinte (20) días. Proyectado el fallo, se pasará el expediente a los otros Vocales en el turno que se establezca por sorteo para que se expidan en un término que no excederá de cinco (5) días para cada uno. El Presidente votará en último término.

Con la opinión de los Vocales volverá el expediente a la división de origen para que redacte el fallo, que será dado en el primer acuerdo subsiguiente que el Tribunal realice.

La demora de los Vocales o del Presidente en expedirse, constituirá falta grave si fuere reiterada y podrá determinar su enjuiciamiento y separación.

La sentencia se notificará en la forma establecida en el artículo 27°.

Art. 31°.- La sentencia final del Tribunal de Cuentas será recurrible ante la Suprema Corte de Justicia por la vía de los recursos que prevé el Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

La Suprema Corte deberá oír al Procurador General y dictar resolución a la vista de los antecedentes requeridos, indefectiblemente dentro de los cuarenta (40) días de planteada la acción.

CAPITULO VII

CUMPLIMIENTO DEL FALLO

Art. 32°.- Si el Administrador declarado alcanzado cumpliera la sentencia depositando la cantidad importe del cargo, en el Banco de la Provincia a la orden del Presidente del Tribunal, dicho funcionario dispondrá la transferencia a la orden de la autoridad administrativa que corresponda.

//..

Art. 33°.- Si no se efectuare el depósito o no se interpusieran los recursos autorizados por esta ley, dentro del término fijado, el Presidente del Tribunal y el Fiscal de Estado para

Art. 34°.- En todos los casos el Presidente del Tribunal la iniciación de la causa, indicando Juzgado y Secretaría, así como el estado del juicio cuando éste le solicite informe.

Art. 35°.- Las decisiones del Tribunal tendrán fuerza ejecutiva y la acción que se deduzca exigiendo su cumplimiento, se registrará por el procedimiento del juicio de apremio. Será Juez competente cualquiera que fuere el monto del alcance, el de Primera Instancia en lo Civil y Comercial, del Departamento Judicial al que corresponda el lugar en el cual desempeñó las funciones el responsable de la inversión de Fondos desaprobados.

Art. 36°.- Las acciones originadas por los fallos del Tribunal no se suspenderán sino en el caso de interposición de los recursos que autoriza esta ley o cuando se efectúe el pago o se consigne el importe del cargo en el Banco de la Provincia a la orden del Presidente del Tribunal.

CAPITULO VIII

EFFECTOS DEL FALLO

Art. 37°.- El fallo que pronuncie el Tribunal, hará cosa juzgada, en sede administrativa, en cuanto se refiere a si la percepción e inversión de fondos ha sido hecha de acuerdo a las disposiciones legales vigentes, al monto de las cantidades percibidas e invertidas, a la imputación del pago con relación a la exactitud de los saldos.

CAPITULO IX

5037

RECURSOS CONTRA LAS DECISIONES DEL TRIBUNAL

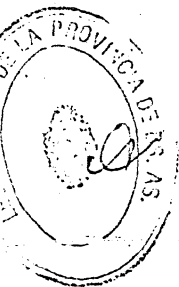
Art. 38°.- Contra los fallos del

que el autorizado por el artículo 31° de esta ley y el de revisión. Este último deberá ser interpuesto ante el mismo Tribunal dentro del término de quince días contados desde la fecha de la notificación por la persona declarada alcanzada, o sus representantes, fundando en pruebas o documentos nuevos que justifiquen las partidas desechadas o en la no declaración o errónea interpretación de los documentos ya presentados. No será necesario el previo depósito del alcance para intentar este recurso.

Art. 39°.- Para la revisión se observará el siguiente procedimiento:

1. Presentada la solicitud de revisión, el Tribunal decidirá sin recurso, si la revisión procede ó no. Si se declarara que la revisión es procedente se remitirá el expediente con los nuevos antecedentes o documentos que deben considerarse al Relator, para que se pronuncie.
2. Del informe del Relator se correrá traslado por un término que no excederá de treinta (30) días, al Administrador declarado por el fallo anterior, para que lo conteste dentro del término que se fije, no mayor de treinta (30) días. Recibida la contestación o vencido el término para presentarla, el expediente pasará nuevamente a sentencia.

Art. 40°.- Si el Tribunal revocara su anterior fallo y dejara sin efecto cargos formulados, lo comunicará al Poder Ejecutivo o al Intendente Municipal para que aquél o éste disponga la inmediata restitución de las cantidades que pudieran haberse pagado en virtud del fallo revocado, sin esperar que la Legislatura o el Concejo, en su caso, vote un crédito



especial debiendo el Poder Ejecutivo o el Intendente, dar cuenta a la Legislatura o al Concejo dentro del término de treinta (30) días.

Art. 41°.- Para los casos de ley, será el Intendente Administrativo y Comercial de la Provincia de Buenos Aires.

CAPITULO X

DISPOSICIONES GENERALES

Art. 42°.- El estudio de la cuenta no podrá recaer sobre cuestiones de oportunidad, conveniencia y eficacia de los actos que le dieron origen, pronunciándose sobre la legalidad de la misma.

Art. 43°.- El Tribunal dictará su Reglamento Interno. Además proyectará y someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo la reglamentación de esta ley, dentro de los treinta (30) días de su publicación.

Art. 44°.- Respecto del Sumario de Responsabilidad, se seguirán los procedimientos establecidos en el Decreto-Ley 7764/71 (texto ordenado Decreto 9167/86) y artículo 242° y Complementarios del Decreto-Ley 6769/58 (Ley Orgánica de las Municipalidades).

Art. 45°.- El Tribunal editará un Boletín Trimestral con su doctrina administrativa, que contendrá sus resoluciones, fallos, circulares y dictámenes.

CAPITULO XI

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Art. 46°.- Las cuentas provinciales y municipales correspon-

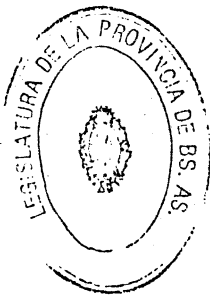
dientes a Ejercicios Cerrados hasta el año 1988 inclusive, que a la fecha de la publicación de la presente ley no hayan sido resueltas por el Tribunal de Cuentas, deberán resolverse antes del 31 de Diciembre de 1990, y las cuentas del Ejercicio de 1989, antes del 30 de Abril de 1991, siempre y cuando fueran remitidas al Honorable Tribunal de Cuentas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Caso contrario, las cuentas se considerarán aprobadas.

A partir del comienzo del Ejercicio 1990, se observarán, el procedimiento y los plazos previstos en la presente ley.

Art. 47°.- Deróganse las leyes 4373, 4568, Decreto-Ley 892/55, Ley 8038 y toda otra disposición que se oponga a la presente.

Art. 48°.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de Buenos Aires, en la ciudad de La Plata a los cinco días del mes de Diciembre de mil novecientos ochenta y nueve.



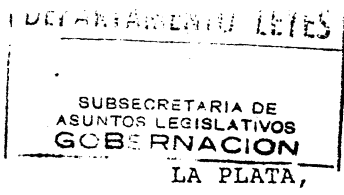
Secretario de la C. de DD.

Secretario del Senado.

Del Poder Ejecutivo

de la

Provincia de Buenos Aires



5937

27 DIC 1969

Visto el ...
cual tramita el proyecto ...
latura con fecha 5 de diciembre ...
tituye un nuevo régimen orgánico del Tribunal de Cuentas ...
Provincia y,

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional con competencia específica establecida en la ley suprema;

Que el ejercicio de la función de control sobre la percepción e inversión de los fondos públicos atribuido a dicho Organismo, es esencial en el sistema republicano;

Que modernamente se ha sostenido que la función de control, se encuentra íntimamente ligada a la existencia y consolidación de la democracia;

Que la labor del perfeccionamiento de la normativa que regula los aspectos vinculados al control ejercido por el Tribunal de Cuentas, es plenamente compartida por este Poder Ejecutivo;

Que los conceptos vertidos en los Considerandos anteriores imponen, en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 95 de la Constitución de la Provincia, observar todos aquellos aspectos que no respondan a los principios enunciados;

Que conforme a lo expresado, la facultad atribuida al Tribunal de Cuentas para inhabilitar para el desempeño de funciones provinciales o municipales puede ser interpretado como exceso del legislador, atento que dicha facultad no se encuentra explícita ni implícitamente establecida por el artículo 147 de la Constitución de la Provincia;

Que con respecto a la facultad de efectuar la comprobación sumaria de los hechos cometidos en la inversión de los fondos públicos, la misma colisiona con la Ley de Contabilidad en



[Handwritten signature]

///

Visto el expediente número 2100-48.799/89, por el cual tramita el proyecto de ley sancionado por la Honorable Legislatura con fecha 5 de diciembre de 1989, mediante el cual se instituye un nuevo régimen orgánico del Tribunal de Cuentas de la Provincia y,

CONSIDERANDO:

Que el Tribunal de Cuentas es un órgano constitucional con competencia específica establecida en la ley suprema;

Que el ejercicio de la función de control sobre la percepción e inversión de los fondos públicos atribuido a dicho organismo, es esencial en el sistema republicano;

Que modernamente se ha sostenido que la función de control, se encuentra íntimamente ligada a la existencia y consolidación de la democracia;

Que la labor del perfeccionamiento de la normativa que regula los aspectos vinculados al control ejercido por el Tribunal de Cuentas, es plenamente compartida por este Poder Ejecutivo;

Que los conceptos vertidos en los Considerandos anteriores imponen, en ejercicio de la facultad atribuida por el artículo 95 de la Constitución de la Provincia, observar todos aquellos aspectos que no respondan a los principios enunciados;

Que conforme a lo expresado, la facultad atribuida al Tribunal de Cuentas para inhabilitar para el desempeño de funciones provinciales o municipales puede ser interpretado como un proceso del legislador, atento que dicha facultad no se encuentra explícita ni implícitamente establecida por el artículo 147 de la Constitución de la Provincia;

Que con respecto a la facultad de efectuar la comprobación sumaria de los hechos cometidos en la inversión de los fondos públicos, la misma colisiona con la Ley de Contabilidad en

de la

Provincia de Buenos Aires

/// 2.

cuanto a las respectivas competencias, lo que puede producir in -
terpretaciones que generen conflictos entre los Organismos de Con
trol;

Que con relación a la aprobación automática de las -
cuentas, tal como está planteado en el proyecto de ley sancionado,
merece una futura reelaboración;

Que con relación a las facultades reglamentarias pre
vistas por el proyecto sancionado por la Honorable Legislatura, -
las mismas son una atribución constitucional del Poder Ejecutivo,
que ejercerá en tiempo y forma oportuna;

Que razones técnicas jurídicas respecto a la vigen -
cia y derogación de las normas que han de regir en el tiempo, im-
ponen una adecuación que solamente en esta instancia puede reali-
zarse a través del ejercicio de la facultad de observar el proyec
to de ley.

Por ello,

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

D E C R E T A :

ARTICULO 1.- Vétase parcialmente el proyecto de ley mencionado -
----- en el Visto del presente decreto, en lo siguiente:

- a) Artículo 3: el párrafo que dice: "Tampoco podrán ser miem
bros los inhabilitados para ejercer la función pública -
por el propio Tribunal".
- b) Artículo 14: inciso 4).
- c) Artículo 16: en el primer párrafo "las siguientes sancio-
nes", y el inciso 5) en su totalidad.
- d) Artículo 24: en el inciso 5) el último párrafo que dice:-
"Caso contrario, las cuentas se considerarán aprobadas".
- e) Artículo 43
- f) Artículo 46: el párrafo que dice: "Las cuentas provincia-
les y municipales correspondientes a Ejercicios Cerrados

///

1. / 10.000,00, LT

Poder Ejecutivo

de la

Provincia de Buenos Aires

113.

hasta el año 1988 inclusive, que a la fecha de la publicación de la presente ley no hayan sido resueltas por el Tribunal de Cuentas, deberán resolverse antes del 31 de diciembre de 1990, y las cuentas del Ejercicio 1989, antes del 30 de abril de 1991, siempre y cuando fueran remitidas al Honorable Tribunal de Cuentas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley. Caso contrario, las cuentas se considerarán aprobadas".

g) Artículo 47.-

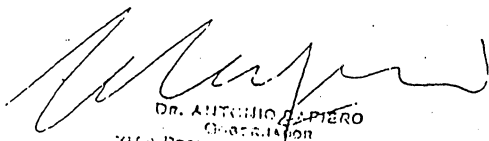
ARTICULO 2.- Promúlgase como ley el proyecto aludido en el Visto del presente decreto.

ARTICULO 3.- Comuníquese a la Honorable Legislatura las observaciones formuladas.

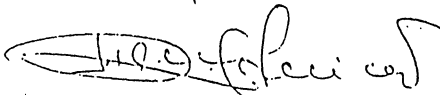
ARTICULO 4.- El presente decreto será refrendado por el señor Ministro Secretario en el Departamento de Economía.

ARTICULO 5.- Regístrese, comuníquese, publíquese, dese al Boletín Oficial y archívese.-

DECRETO Nº 5937



DR. ANTONIO CAPIERO
GOBERNADOR
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES



LIC. JORGE LUIS RENÉ LENICOV
MINISTRO DE ECONOMÍA
DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES